



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

INFORME SECRETARIAL

Barranquilla, 17/02/2.021

Radicado	08001-33-33-014-2020-00050-00
Medio de control o Acción	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante	Electricaribe S.A. E.S.P.
Demandado	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Juez	Guillermo Osorio Afanador

INFORME
Señor juez, paso a su despacho el expediente de la referencia, informando que la parte demandante interpuso tanto una solicitud de ilegalidad, como un recurso de apelación contra la providencia de 19 de noviembre de 2.020 que rechazó la demanda.-

PASA AL DESPACHO
Analizar concesión del recurso de apelación - Solicitud de Ilegalidad.-

CONSTANCIA
Auto que rechazó la demanda de fecha 19 de noviembre de 2.020

ALBERTO LUIS OYAGA LARIOS
SECRETARIO

Ultimo Folio Digitalizado y número de cuaderno	Firma de Revisado



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Barranquilla, diecisiete (17) de febrero de dos mil veintiuno (2.021).

Radicado	08001-33-33-014-2019-00050-00
Medio de control o Acción	Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Demandante	Electricaribe S.A. E.S.P.
Demandado	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Juez	Guillermo Osorio Afanador

CONSIDERACIONES

El apoderado de la Sociedad demandante, ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. presentó solicitud de ilegalidad, contra el auto que rechaza la demanda proferido por este despacho, exponiendo las mismas razones con que solicita al H. Tribunal Administrativo del Atlántico revoque dicha providencia de fecha 19 de noviembre de 2.020, puesto que en su sentir, el auto recurrido impone una carga a la parte demandante que torna imposible de cumplir y con su rechazo se afectan derechos fundamentales como al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia.

Sobre este particular de ilegalidad de providencias, al respecto, el H. Consejo de Estado, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, ha dicho:

“La Corte, igualmente, resaltó la importancia que tiene la eficacia de las decisiones judiciales, que son - y deben ser- vinculantes no sólo para los sujetos a los que se dirige (por lo general, las partes procesales), sino también para el juez que las profiere.

“Del mismo modo, como atrás se anticipó, la imposibilidad de modificar lo decidido a través de autos interlocutorios se explica también por el carácter vinculante de las providencias judiciales, el cual se proyecta entre las partes pero también respecto del juez que las profiere. En relación con este punto la jurisprudencia explicó: ‘El carácter vinculante de las decisiones judiciales contribuye a la eficacia del ordenamiento jurídico.

Sólo si las sentencias son obedecidas, el derecho cumple una función social. Pero las sentencias no sólo vinculan a las partes y a las autoridades públicas; también el juez que las profiere está obligado a acatar su propia decisión, sin que pueda desconocerla argumentando su cambio de parecer.’ “Cabe reseñar que el carácter vinculante no sólo se predica de las sentencias y de las providencias que ponen fin a una controversia, sino también de las decisiones judiciales, en general, una vez cobran ejecutoria. El alcance de este carácter, sin embargo, no es el de excluir la posibilidad de que las providencias puedan ser controvertidas y modificadas a través del ejercicio de los medios de impugnación que se han previsto en el ordenamiento jurídico, entre los cuales se encuentran los recursos y las nulidades que pueden ser declaradas de oficio o a petición de parte. Así mismo, el carácter vinculante tampoco conduce a que las decisiones ejecutoriadas aten al juez “cuando quedan desligadas del conjunto totalitario del procedimiento, en cuanto a los efectos de ellas mal pueden tender a la consecución del acto jurisdiccional que ha de constituir el fin del proceso, rompiendo, por lo tanto, su unidad”. En síntesis, de lo anterior se desprende que el juez sólo puede apartarse de lo decidido en un auto interlocutorio si es la ley la que establece un mecanismo para ello (como el caso del recurso de reposición) o si la conclusión del proceso que ha de consignarse en la sentencia no armoniza con la decisión previa.”



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Como se observa, es claro el antecedente jurisprudencial respecto al asunto planteado, pues al juez le está vedado revocar una decisión interlocutoria que ha sido dictada por él mismo, so pretexto de corregir un error en el que ha incurrido. Así las cosas, el ordenamiento procesal establece mecanismos para el control y controversia de los actos jurisdiccionales, tanto de sentencias como de autos. En efecto, los recursos son las principales herramientas de las partes para controlar y controvertir las decisiones judiciales que las afectan, y por tanto, por fuera de los mecanismos procesales establecidos por el Legislador, no es posible revisar decisiones que han creado situaciones jurídicas para las partes y terceros de buena fe, ya que admitir un poder de tal naturaleza sería acabar por completo con los valores fundamentales de la seguridad jurídica, el principio de legalidad y la validez y eficacia de los actos jurisdiccionales. Si bien, la Corte Suprema de Justicia ha admitido el principio “lo interlocutorio no ata al juez”, la Corte Constitucional precisó su alcance, al sostener que se trata de una tesis que debe ser de aplicación restrictiva, justificada, solamente, cuando estén en juego derechos fundamentales de las partes y la validez misma del orden jurídico.

Veamos: “Sin embargo, no desconoce la Corte que, tal como se argumentó por la autoridad judicial accionada, respecto de la regla procesal de la irrevocabilidad de los autos, la Corte Suprema de Justicia ha establecido por vía jurisprudencial una excepción fundada en que los autos manifiestamente ilegales no cobran ejecutoria y por consiguiente no atan al juez – antiprocesalismo- (Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de junio 28 de 1979 MP. Alberto Ospina Botero; Sentencia No. 286 del 23 de Julio de 1987 MP. Héctor Gómez Uribe; Auto No. 122 del 16 de junio de 1999 MP. Carlos Esteban Jaramillo Schloss; Sentencia No. 096 del 24 de mayo de 2001 MP. Silvio Fernando Trejos Bueno, entre otras.)

“De cualquier manera y si en gracia de discusión se acogiera por la Sala este criterio, se tiene que la aplicación de una excepción de estas características debe obedecer a criterios eminentemente restrictivos, pues de no ser así, so pretexto de enmendar cualquier equivocación, el operador jurídico puede resultar modificando situaciones jurídicas constituidas de buena fe respecto de terceros con fundamento en las providencias judiciales y desconociendo con ello normas de orden público, así como el principio de preclusión de las etapas procesales. De manera que no cabe duda que de admitirse la aplicación de esta excepción, la misma sólo procede cuando en casos concretos se verifica sin lugar a discusión que se está frente a una decisión manifiestamente ilegal que represente una grave amenaza del orden jurídico y siempre que la rectificación se lleve a cabo observando un término prudencial que permita establecer una relación de inmediatez entre el supuesto auto ilegal y el que tiene como propósito enmendarlo.”

Para fundamentar la solicitud de ilegalidad, el demandante argumenta que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se realiza demandando un único acto administrativo que impone sanción y un único acto que decide confirmar dicha sanción, es decir, la demanda se presenta con una sola pretensión y no con acumulación de las mismas como, a su parecer, erróneamente lo decidió éste despacho.

Al respecto considera esta agencia judicial, que la providencia proferida en esta instancia, no adolece de ilegalidad, como lo plantea el demandante, puesto que efectivamente el Art. 156 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala en su numeral 8° que: “ (...) En los casos de imposición de sanciones, la competencia se determinará por el lugar donde se realizó el acto o el hecho que dio origen a la sanción.” por lo que en consecuencia, si bien se ha acumulado dentro del trámite administrativo varias actuaciones, también es cierto que algunos de los hechos génesis de la sanción impuesta, no ocurrieron dentro del Departamento del Atlántico, donde por tal factor territorial impiden al despacho conocer de estos asuntos.-



Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Aunado a lo anterior, dado que el demandante hace saber en su solicitud de declarar la ilegalidad, en lo que refiere a una llamada indebida acumulación, resalta el Despacho, tal como se advierte en la demanda, que también se plantean cargos que implican la notoria necesidad de valorar de manera individualizada, distintos casos con los cuales se pretende se declare la nulidad del artículo 1º de la Resolución SSPD No. 20188000102055 del 2018-08-03 y de la Resolución SSPD No. 20198000033975 del 2019-09-05, en relación a la multa, únicamente en cuanto confirma el artículo 1 de la Resolución SSPD No. 20188000102055 del 2018-08-03.

Así mismo, insiste el despacho, no se ha cercenado el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia y defensa, puesto que como bien se advirtieron unas falencias en el auto inadmisorio de la demanda, se le brindó la oportunidad para subsanarlas tal como lo dispone el C.P.A.C.A., como de igual forma ha venido proponiendo los recursos y solicitudes procedentes, los cuales han sido de manera debida y oportuna resueltas por este despacho en derecho.

Por tanto, visto que esta agencia judicial actuó bajo el principio de legalidad, y no se ha apartado del ordenamiento jurídico, resulta claro señalar que no puede predicarse una grave amenaza a las disposiciones normativas enunciadas, en los términos indicados por la jurisprudencia citada.

En conclusión, al no evidenciarse causal de ilegalidad que vicie la actuación adelantada en esta instancia judicial, el despacho procederá a negar la solicitud de ilegalidad impetrada por el apoderado de la Sociedad ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.

CONCESIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN.

Resuelto lo anterior, pasa el Despacho a decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la sociedad demandante contra el auto que rechazó la demanda, al no ser subsanada.

En efecto la Empresa Electricaribe S.A. E.S.P., actuando a través de apoderado judicial, presenta demanda ante esta jurisdicción en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en la que pide se declare la nulidad de la sanción impuesta mediante el artículo 1º de la Resolución SSPD No. 20188000102055 del 2018-08-03 y de la Resolución SSPD No. 20198000033975 del 2019-09-05, en relación a la multa, únicamente en cuanto confirma el artículo 1 de la Resolución SSPD No. 20188000102055 del 2018-08-03, toda vez que dentro del procedimiento administrativo que dio lugar a las sanciones se incurrieron ciertos defectos y como restablecimiento del derecho, se declare que la entidad demandante no está obligada a pagar el valor de la sanción impuesta mediante las resoluciones mencionadas.

El Despacho mediante auto de fecha 19 de noviembre de 2.020 rechazó la demanda, al establecer que el medio de control no se corrigió dentro de la oportunidad legalmente establecida.

El apoderado de la parte demandante mediante memorial radicado a través de la oficina de apoyo de los juzgados administrativos, de fecha 25 de noviembre de 2.020, interpuso recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda.

En relación al recurso de apelación, el artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala:

Rama Judicial del Poder Público
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

“Art. 243.- Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

*1. El que rechace la demanda.
...”*

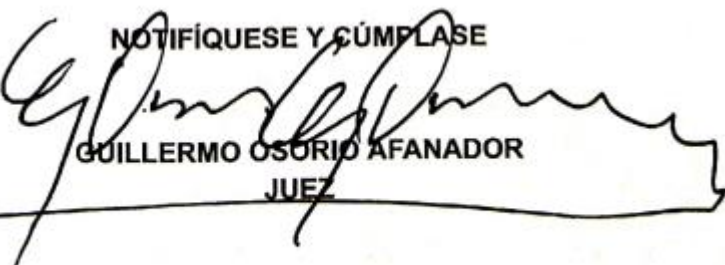
Es de anotar que se aplica el texto original del artículo 243 del CPACA, en observancia a la regla de vigencia y transición normativa dispuesta en el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021, puesto que en el presente caso el recurso fue interpuesto en vigencia del texto original del mencionado artículo 243 del CPACA.

A la luz de la norma arriba citada, y atendiendo a que el recurso de apelación fue presentado dentro del término legal otorgado para ello se **DISPONE**,

1°.- Denieguese la solicitud de declarar la ilegalidad del auto de fecha 19 de noviembre de 2.020 a través del cual se rechazó la demanda impetrada por Electricaribe S.A. E.S.P. contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, propuesta por el apoderado de la parte demandante.

2°.- Conceder en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto de fecha 19 de noviembre de 2.020 a través del cual se rechazó la demanda impetrada por Electricaribe S.A. E.S.P. contra la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

3°.- Por Secretaría y por conducto del Centro de Servicios de los Juzgados Administrativos, remítase el expediente al Honorable Tribunal Administrativo del Atlántico para lo de su competencia funcional. Hagáñse las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GUILLERMO OSORIO AFANADOR
JUEZ

NOTIFICACION POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO
ELECTRONICO
N° 015 DE HOY 18/02/2021 A LAS 8:00 A.M.